

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D.C. diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	11001333502920220043400
CONVOCANTE	GINA ROCÍO ROJAS CASTRO
CONVOCADO	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
ASUNTO	CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

OBJETO

Ocupa al Despacho el estudio de la conciliación extrajudicial de la referencia, a fin de determinar si es competente para conocer del asunto, y de ser así, establecer si debe aprobar o improbar dicho acuerdo conciliatorio.

I. CUESTIÓN PREVIA

Las señoras **MARÍA FERNANDA SOLANO DUMAR, LEONOR LEÓN VELASCO** y **GINA ROCÍO ROJAS CASTRO** actuando por intermedio de apoderado, presentan solicitud de aprobación de la conciliación extrajudicial a que llegaron con la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**. Sin embargo, al revisar la documentación que para el efecto se allega, se observa que se configura una indebida acumulación de pretensiones, que impide dar trámite a la solicitud en la forma en que se presenta, por las razones que a continuación se exponen.

El artículo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece lo referente a la acumulación de pretensiones en los siguientes términos:

“**Art. 165.-** En la demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas y concurren los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la jurisdicción contenciosa administrativa será competente para su conocimiento y resolución.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.
3. Que no haya operado la Caducidad respecto de alguna de ellas.
4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento".

Mientras que, el artículo 88 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA., establece:

"(...) ARTÍCULO 88. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurren los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas, sin tener en cuenta la cuantía.
 2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.
 3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.
- En la demanda sobre prestaciones periódicas podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre

la presentación de aquella y el cumplimiento de la sentencia definitiva.

También podrán formularse en una demanda pretensiones de uno o varios demandantes o contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de unos y otros, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando provengan de la misma causa.

b) Cuando versen sobre el mismo objeto.

c) Cuando se hallen entre sí en relación de dependencia.

d) Cuando deban servirse de unas mismas pruebas.

En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan, total o parcialmente, los mismos bienes del demandado. (...)” (Negrilla del Despacho)

De la lectura de la norma transcrita es evidente que, para que prospere la acumulación de pretensiones, deben reunirse los requisitos allí señalados, pero en ningún caso se menciona que puedan acumularse pretensiones de diferentes demandantes que no tienen relación entre sí, como en el presente asunto. Así entonces, sobre el tema en específico de la indebida acumulación de pretensiones, el H. Consejo de Estado ha indicado:

“En la demanda se pide la nulidad de actos generales y de actos particulares, mediante los cuales el Municipio de Cali, reestructuró la planta de personal de esa Contraloría y en consecuencia, suprimió el cargo de los 32 demandantes, que no 31 como erradamente lo expresa el Tribunal en su providencia. Como restablecimiento del derecho, piden el reintegro, el pago de salarios y prestaciones debidos desde el momento del retiro.

El Tribunal rechazó la demanda por indebida acumulación de pretensiones, ya que ella no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 82 del C. de P.C. En efecto, esta Sala comparte el criterio del a quo, como quiera que **no hay unidad de causa, ni identidad de objeto y el restablecimiento del derecho para cada uno de los 32 demandantes se presenta de manera diferente**, teniendo en cuenta primero, el día de ingreso y que la desvinculación del servicio se produjo en fechas diferentes, porque algunos de los oficios de comunicación de la supresión, ni siquiera tienen constancia del día en que fue realizada.

Así las cosas, las pretensiones de todos los demandantes no se pueden servir de las mismas pruebas.¹ (Negrillas del Despacho)

En otra oportunidad indicó:

“Dispone el inciso 3° del artículo 82 del C. de P.C., que pueden formularse en una misma demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que éstas provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia, o deban servirse específicamente de unas mismas pruebas.

Como puede observarse, aun cuando se trata del mismo acto administrativo, éste produce efectos individuales para cada uno de los actores, por lo que no puede decirse que sus pretensiones tengan una causa común; tampoco existe dependencia entre las pretensiones de uno y otro demandante, ni las pruebas son comunes, pues en cada caso deberá probarse los vicios que se endilgan al acto y las circunstancias del restablecimiento del derecho pretendido que son particulares y específicas sin relación alguna entre sí.

¹ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Auto de 8 de mayo de 2003, expediente No. 76001-23-31-000-2001- 4522-01(4036-02), C.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda

Asimismo, el vínculo que une a cada uno de los peticionarios con la administración es particular y concreto; los servicios prestados por cada cual son personales y generan derechos individuales; y el hecho de que se invoquen como vulneradas unas mismas normas, no significa que exista unidad de causa, pues la causa de la pretensión la integran los hechos constitutivos (no accesorios, circunstanciales o complementarios) de la relación sustancial debatida.

Pero además, existen pretensiones económicas que en el evento de prosperar tienen connotación diferente para cada uno de los peticionarios, dependiendo del salario, tiempo de servicios y demás circunstancias que se toman en consideración bajo un régimen normativo específico, lo que no deja duda acerca de que el objeto de las demandas no es el mismo y que hay imposibilidad legal de acumular las pretensiones dentro de un mismo proceso.

No queda duda entonces que no se dan los requisitos exigidos por el artículo 82 del Código de procedimiento Civil, que permitan estudiar bajo una misma cuerda las pretensiones acumuladas.

En consecuencia, estima la sala que cada uno de los demandantes debió promover por separado su respectiva acción, para obtener el restablecimiento particular y concreto, pues al hacerlo en una misma demanda se incurrió en indebida acumulación de pretensiones, defecto de fondo que no es susceptible de ser subsanado.²

Es así como, de acuerdo a lo considerado por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el presente caso puede determinarse que, siendo el vínculo de cada convocante con la administración particular y concreto, que los servicios prestados por cada uno de ellos es personal y genera derechos individuales, que la

² Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Auto de 18 de octubre de 2007, expediente No. 13001-23-31-000- 2004-00979-01(7865-05), C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

identidad de normas vulneradas no implica la existencia de unidad de causa, y que las pretensiones de orden económico tienen una connotación diferente para cada convocante, no puede tramitarse la pluricidad de solicitudes que bajo un mismo expediente.

No obstante, la garantía fundamental del acceso a la administración de justicia que le asiste a los convocantes exige que el Despacho tome los correctivos necesarios para dar el trámite correspondiente a cada situación particular.

Por consiguiente, el Juzgado continuará con el análisis de la solicitud de aprobación de conciliación en lo relacionado con la señora **GINA ROCÍO ROJAS CASTRO**, y ordenará el desglose de todas las piezas procesales relativas a las señoras **LEONOR LEÓN VELASCO** y **MARÍA FERNANDA SOLANO DUMAR**; documentos con los cuales el apoderado interesado deberá conformar solicitudes que, en todo caso, mantendrán como fecha de presentación el día **12 de septiembre de 2022**, según consta en el acta de reparto y tendrán un número de consecutivo propio otorgado por la Oficina de Apoyo Judicial.

En el evento de encontrarse documentos que resulten trascendentes para uno y otro caso al mismo tiempo, la Secretaría expedirá copia auténtica de dichas actuaciones y de la presente providencia, a costa de la parte interesada.

El apoderado de la parte actora deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en esta providencia.

En consecuencia, procede el Despacho a estudiar lo pertinente frente al acuerdo conciliatorio de la señora **GINA ROCÍO ROJAS CASTRO** y la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**.

II. ANTECEDENTES

Obran como pruebas que fundamentan la conciliación extrajudicial, las siguientes:

1. Solicitud presentada el **18 de julio de 2022**, por la señora **GINA ROCÍO ROJAS CASTRO** mediante escrito **radicado 2022-01-563317** ante el **SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES**, por medio de la cual solicita el **RECONOCIMIENTO** y **PAGO** de las sumas de dinero correspondientes a las

diferencias generadas al haber omitido la contabilización de la **RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO** en la liquidación de la **PRIMA DE ACTIVIDAD**, la **BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN y VIÁTICOS** y todas aquellas a cargo de esa entidad que no incorporan dicho factor de la asignación básica, peticionando también que dicha suma sea indexada y pagada con los respectivos intereses.

2. Oficio **2022-01 - 604119 del 11 de agosto de 2022**, por medio del cual se da respuesta a la anterior petición suscrito por el **COORDINADOR DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO** de la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**.
3. Solicitud conjunta de Conciliación Extrajudicial, radicada por las señoras **MARÍA FERNANDA SOLANO DUMAR, LEONOR LEÓN VELASCO y GINA ROCÍO ROJAS CASTRO** ante la Procuraduría General de la Nación, con sus respectivos anexos y poder, el 06 de septiembre de 2022, mediante escrito de radicación 2022-01-663793.
4. Acuerdo conciliatorio suscrito por la **PROCURADORA 4 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS** y los apoderados de las partes.
5. Certificación expedida por el Secretario Técnico del Comité de Conciliación de la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, en la cual consta la intención de conciliar de esta entidad pública con los tres convocantes, incluida la señora **GINA ROCÍO ROJAS CASTRO**.
6. Liquidación del acuerdo conciliatorio entre la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES** y la señora **GINA ROCÍO ROJAS CASTRO**.
7. Acta de **AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL** que tuvo lugar ante **PROCURADURÍA 4 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS** los días **27 de octubre de 2022 y 17 de noviembre de 2022** y que fue celebrada entre la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES** y entre otros, la señora **GINA ROCÍO ROJAS CASTRO**, quien, a través de su apoderado judicial llegó con esa entidad al acuerdo conciliatorio que ocupa la atención del Despacho.

8. Oficio remitatorio de la conciliación celebrada entre las partes, junto con todos sus anexos a la Oficina de Reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá.

III. EL ACUERDO CONCILIATORIO

De conformidad con la precitada acta de la diligencia no presencial, en su primera parte que tuvo lugar el **27 de octubre de 2022**, una vez instalada, se le concede el uso de la palabra al apoderado de las tres personas convocantes, incluida la señora **GINA ROCÍO ROJAS CASTRO**; quien expuso sus pretensiones y en relación con la convocante señaló: **EN RELACION CON GINA ROCÍO ROJAS CASTRO: PRIMERA:** Se concilien los efectos contenidos y decididos dentro del oficio con radicado **2022-01-604099**, acto administrativo de fecha **11 de agosto de 2022**. **SEGUNDA:** Que como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho se cancele a su favor la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS (\$1.609.361)**, por la reliquidación de los conceptos de PRIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, VIÁTICOS y los REAJUSTES de los anteriores conceptos, con la inclusión del porcentaje correspondiente a la RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO, por el periodo de tiempo señalado en la certificación emitida por el Coordinador Grupo de Administración de Personal de la Superintendencia de Sociedades, que se adjunta a la presente solicitud"

Así mismo, se le concedió el uso de la palabra a la apoderada de la entidad convocada, en orden a que informara la decisión adoptada por el Comité de Conciliación, quien señaló:

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Superintendencia de Sociedades, en reunión celebrada el día 07 de octubre de 2022 (acta No. 19-2022) estudió el caso de GINA ROCÍO ROJAS CASTRO (CC 1.010.184.946) y decidió de manera **UNÁNIME CONCILIAR** las pretensiones de la convocante (Reserva Especial del Ahorro), por valor de \$1.609.361,00.

La fórmula de conciliación es bajo los siguientes parámetros:

1. Valor: Reconocer la suma de \$1.609.361,00. pesos m/cte., como valor resultante de re liquidar los factores solicitados, para el período comprendido entre el 29 de enero de 2020 al 18 de julio de 2022, incluyendo allí el factor denominado reserva especial del ahorro, a la liquidación efectuada por la entidad y aceptada por la convocante.
2. No se reconocerán intereses ni indexación, o cualquier otro gasto que se pretenda por la convocante, es decir, sólo se reconoce el capital conforme a la liquidación realizada por la entidad.
3. Se debe tener en cuenta la prescripción trienal de las sumas indicadas, conforme la certificación aludida.
4. Pago: Los valores antes señalados serán cancelados dentro de los 60 días siguientes a aquél en el que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa apruebe la conciliación, no generando intereses tampoco en este lapso.
5. Forma de pago: El pago se realizará, mediante consignación en la cuenta que la funcionaria tenga reportada en la entidad para el pago de nómina, salvo indicación en contrario de la solicitante, comunicada a la entidad al momento de elevar la petición de pago, o en todo caso, antes de efectuarse el pago respectivo.

La presente certificación se expide con base en lo dispuesto en inciso 2 del Artículo 2.2.4.3.1.2.4. del Decreto 1069 de 2015, y en el artículo 6 de la Constitución Política.

La apoderada de la convocada SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, allegó junto con la solicitud inicial, en tres (3) folios, certificaciones de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación, expedidas el 10 de octubre de 2022. Las propuestas conciliatorias fueron aceptadas por cada uno de los convocantes y no ha ocurrido la caducidad del medio de control. Resalta que no se reconocerán intereses y la forma de pago se realizará en la cuenta de los funcionarios en la cual se les cancela la nómina mensual. Dicho documento se puso en consideración de la parte convocada durante la presente audiencia.

La Procuradora Judicial teniendo en cuenta la manifestación de las partes y, luego de señalar que tuvo acceso a la decisión del comité de conciliación, hasta ese día, toda vez que las certificaciones correspondientes fueron allegadas el día anterior a las 6:27 p.m. es decir, fuera de la hora hábil, advierte que procederá a suspender la audiencia para revisar la propuesta presentada y conceptuar sobre el acuerdo que se pretende celebrar, fijando como fecha para su continuación el **17 de noviembre de 2022 a las 09:30 a.m.**

Habiendo sido reanudada la diligencia en la fecha señalada, de forma no presencial, se retoman las pretensiones respecto de las convocantes y, seguidamente, la Procuradora Judicial señala que, después de haber analizado la propuesta presentada por la entidad convocante, además, de las pruebas aportadas con el escrito de solicitud de conciliación, el acuerdo contiene obligaciones claras,

expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento . Lo anterior dado que las propuestas conciliatorias contienen un concepto y monto específico, así como las condiciones de su cumplimiento y, para el caso de la convocante **GINA ROCÍO ROJAS CASTRO** la fórmula conciliatoria reconoce la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS (\$1.609.361)**, por concepto de reliquidación de las prestaciones solicitadas (prima de actividad, bonificación por recreación), con la inclusión de la reserva especial del ahorro. Tales sumas a pagar, previstas en condiciones de modo, tiempo y lugar concretas, en tanto las certificaciones del comité indican que tales valores serán cancelados dentro de un plazo determinable de 60 días siguientes a la aprobación en sede judicial en la cuenta de nómina de las convocantes. Se observa además que el acuerdo reúne los siguientes requisitos: **(i)** el eventual medio de control que se ha podido llegar a presentar no ha caducado, teniendo en cuenta que la señora ROJAS CASTRO presentó solicitud el 18 de julio de 2022, con radicado 01-563317 y que, luego del trámite de respuesta de la entidad y solicitud de aceptación de liquidación, se radicó el trámite para las tres (3) convocantes el día 11 de septiembre de 2022; **(ii)** el acuerdo conciliatorio versa sobre sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial disponibles por las partes (art. 59, Ley 23 de 1991, y 70, Ley 446 de 1998), en este punto resulta evidente que la solicitud y el acuerdo efectuado entre las partes versa sobre la reliquidación de unas prestaciones representadas en el valor económico objeto de la conciliación, aspecto que es disponible por las partes **(iii)** las partes se encuentran debidamente representadas y sus representantes tienen capacidad para conciliar; el acuerdo que contiene las propuestas conciliatorias a las convocantes está contenido en las respectivas certificaciones del Secretario Técnico del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad. **(iv)** obran en el expediente las pruebas necesarias que justifican el acuerdo (*poder debidamente otorgado; Derecho de petición con número de radicado 2022-01-563317 del 18 de julio de 2022; Certificación suscrita por el Coordinador del Grupo de Administración del Talento Humano, en la que consta la liquidación efectuada por la Entidad con su correspondiente cuantía, con número de radicación 2022-01-600621 del 10 de agosto de 2022; Respuesta de la Entidad; Acto administrativo a conciliar con número de radicado 2022-01-604119 del 11 de agosto de 2022; Aceptación de la fórmula conciliatoria y radicación correspondiente 2022-01-624402 del 24 de agosto de 2022; Documentales conjuntas; Acta 014 del 02 de junio de 2015; Concepto emitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 20155000052581-DDJ de fecha 10 de junio de 2015*) **(v)** el acuerdo contenido en el acta no es

violatorio de la Ley y no resulta lesivo para el patrimonio público (art. 65 A, Ley 23 de 1.991 y art. 73, Ley 446 de 1998) , lo anterior por cuanto existe criterio jurisprudencial en el sentido de otorgar dicho reconocimiento de reliquidación de algunas de las prestaciones sociales consistentes en: PRIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, PRIMA POR DEPENDIENTES, para la convocante MARÍA FERNANDA SOLANO DUMAR, para la convocante GINA ROCÍO ROJAS CASTRO, teniendo en cuenta para ello, la RESERVA ESPECIAL DE AHORRO. Este reconocimiento con sustento jurídico en el entendimiento y aplicación de lo previsto en el Acuerdo 040 de 1991 y el Decreto Ley 1695 de 1997, artículo 12, bajo la interpretación vigente contenida en la jurisprudencia del Consejo de Estado a través de la cual se ha expresado que la reserva especial del ahorro constituye un factor salarial que debe tenerse en cuenta y aplicarse para el reconocimiento y pago de las demás prestaciones sociales.

Frente a lo anterior, la Procuradora señaló que en razón de contar la conciliación con el sustento legal antes indicado, se acreditó la legitimidad de su reclamo, dado que la convocante GINA ROCÍO ROJAS CASTRO laboró en la entidad durante el período objeto de reconocimiento; pues se desempeña en el cargo de Auxiliar Administrativo 404414 de la Planta Globalizada, Sede Bogotá acorde a certificaciones expedidas en todos los casos por el Coordinador del Grupo de Administración de Talento Humano. Adicionalmente, refiere que los valores están debidamente liquidados sin que se reconozca indexación o intereses y dando aplicación a la prescripción trienal, limitación temporal por lo que anuncia, dispondrá el envío del acta, junto con los documentos pertinentes, a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, reparto, para efectos de control de legalidad.

IV. CONSIDERACIONES

Esta sede judicial es competente para pronunciarse sobre la aprobación del acuerdo conciliatorio antes citado, para lo cual debe recordarse que desde la expedición de la Ley 23 de 1991, modificada por la Ley 446 de 1998 y desarrollada por la Ley 640 de 2001, la conciliación se extendió hasta el campo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo procedente sobre aquellos conflictos de carácter particular y contenido económico que se encuentren en el ámbito de su competencia, susceptibles de ser enjuiciados con ocasión de las acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Contractuales y de Reparación Directa. Lo anterior,

por estricto mandamiento del artículo 59 de la mencionada Ley 23 de 1991, cuyo texto es del siguiente tenor:

"ARTICULO 59. (Modificado por el Art. 70, Ley 446 de 1998). Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales, sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ventilarían mediante las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo."

En desarrollo de las normas referenciadas, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009 "Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001", obra que contiene la ordenación que rige el procedimiento conciliatorio extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo.

Así pues, ha de observarse que la solicitud de conciliación haya reunido los requisitos establecidos por el artículo 6 del Decreto 1716 de 2009, que son los siguientes:

- "a) La designación del funcionario a quien se dirige;
- b) La individualización de las partes y de sus representantes si fuere el caso;
- c) Los aspectos que se quieren conciliar y los hechos en que se fundamentan;
- d) Las pretensiones que formula el convocante;
- e) La indicación de la acción contencioso administrativa que se ejercería;
- f) La relación de las pruebas que se acompañan y de las que se harían valer en el proceso;
- g) La demostración del agotamiento de la vía gubernativa, cuando ello fuere necesario;
- h) La estimación razonada de la cuantía de las aspiraciones;
- i) La manifestación, bajo la gravedad del juramento, de no haber presentado demandas o solicitudes de conciliación con base en los mismos hechos;

- j) La indicación del lugar para que se surtan las notificaciones, el número o números telefónicos, número de fax y correo electrónico de las partes.
- k) La copia de la petición de conciliación previamente enviada al convocado, en la que conste que ha sido efectivamente recibida por el representante legal o por quien haga sus veces, en el evento de que sea persona jurídica, y en el caso de que se trate de persona natural, por ella misma o por quien esté facultado para representarla;
- l) La firma del apoderado del solicitante o solicitantes;
- (...)"

De la misma manera, el Decreto 1365 del 27 de junio de 2013 "Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de la Ley 1564 de 2012, relativas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado", establece:

"Artículo 4. Entrega de copia de solicitud de conciliación extrajudicial a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En desarrollo del artículo 613 de la Ley 1564 de 2012, el peticionario que solicite conciliación extrajudicial deberá acreditar la entrega de copia a la Agencia cuando el asunto involucre intereses litigiosos de la Nación, en los términos previstos en el parágrafo del artículo 2 del Decreto Ley 4085 de 2011 y el presente Decreto".

Igualmente, de conformidad con el marco jurídico vigente, para efectos de impartir la aprobación prevista en el artículo 24 de la Ley 640 de 2001, el juez de conocimiento debe verificar que el acuerdo conciliatorio:

- Verse sobre un asunto conciliable.
- No afecte derechos fundamentales, ni atente contra el ordenamiento jurídico.
- No sea lesivo para el patrimonio público.
- No haya tenido como objeto asuntos en los cuales la acción a precaver se encuentre caducada.

En ese orden, procede el Despacho a referirse el marco normativo que regula la materia, así como a la verificación del cumplimiento de los antedichos requisitos:

En el caso objeto de análisis tenemos que figuran como **SUJETOS**, por la parte **ACTIVA: GINA ROCÍO ROJAS CASTRO**, quien actúa a través de su apoderado judicial, mediante poder debidamente otorgado, y por la parte **PASIVA** la

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADS, quien igualmente actúa a través de apoderado judicial, mediante poder debidamente otorgado.

Ahora bien, teniendo en cuenta el tema objeto de conciliación se considera pertinente citar el Acuerdo 040 de 13 de noviembre de 1991, expedido por la Junta Directiva de la Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades y cuyo artículo 58 en relación con la reserva Especial de Ahorro preceptúa lo siguiente:

“ARTÍCULO 58. Contribución del Fondo de Empleados. RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO. Corporanónimas contribuirá con sus aportes al Fondo de Empleados de la Superintendencia de Sociedades y Corporanónimas. Entidad con personería jurídica reconocida por la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Para tal fin pagará mensualmente a sus afiliados forzosos una suma equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) del sueldo básico, prima de antigüedad, prima técnica y gastos de representación; de este porcentaje entregará Corporanónimas directamente al Fondo el quince por ciento (15%) previa deducción de la cotización que sea del caso por concepto de la afiliación de los beneficiarios. Los afiliados forzosos contribuirán mensualmente al Fondo con el cinco por ciento (5%) de las asignaciones básicas mensuales fijadas por la ley...”

Con respecto al órgano competente para el pago de prestaciones a favor de los empleados de las Superintendencias, es fundamental la regulación dispuesta por el artículo 12 del Decreto 1695 de 1997, que señala:

“ARTÍCULO 12. PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS. El pago de los beneficios económicos del régimen especial de prestaciones económicas de los empleados de las Superintendencias afiliadas a Corporanónimas, contenido en los Decretos 2739 de 1991, 2156 de 1992, 2621 de 1993, 1080 de 1996 y el Acuerdo 040 de 1991 de la Junta Directiva de Corporanónimas, en adelante estará a cargo de dichas superintendencias, respecto de sus empleados, para lo cual en cada vigencia fiscal se apropiarán las partidas presupuestales necesarias en cada una de ellas, en los mismos términos establecidos en las disposiciones mencionadas en el presente artículo.”

Establecido lo anterior, se observa que:

- a) La solicitud de conciliación extrajudicial elevada por la convocante, cumple con los requisitos señalados por el Decreto 1716 de 2009.
- b) El asunto aquí debatido es perfectamente conciliable, por cuanto lo que fue objeto de arreglo entre las partes involucradas, hace alusión al reconocimiento y pago de factores salariales.
- c) El asunto conciliado versa sobre un derecho de contenido particular y económico, lo cual es de libre disposición por los acordantes, sin que con ello se afecte derecho fundamental alguno o vaya contra la ley o la jurisprudencia, toda vez que proviene de una obligación contraída por las partes conforme a la normatividad existente en materia laboral.
- d) El acuerdo celebrado no resulta lesivo para el patrimonio público, por cuanto la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES** está reconociendo a la señora **GINA ROCÍO ROJAS CASTRO** el derecho que le asiste a percibir lo correspondiente a **PRIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, HORAS EXTRAS y VIÁTICOS**, que se causaron a su favor en relación con el factor de **RESERVA ESPECIAL DE AHORRO**. Sobre este particular, debe mencionarse que el derecho objeto de la presente conciliación fue estudiado por el Comité de Conciliación de la mencionada entidad, como consta en la respectiva certificación, y en la cual dicho comité recomendó y autorizó, de forma expresa, conciliar la presente controversia, de conformidad con la fórmula propuesta en pleno. Así mismo, resulta pertinente destacar que de la estimación de los montos adeudados a la convocada obra prueba correspondiente a las liquidaciones allegadas al expediente contenida en certificación expedida por el Coordinador del Grupo de Administración de Personal de la entidad, por lo que queda claro para el Despacho que el acuerdo conciliatorio al cual llegaron las partes se propuso dentro de un marco de razonabilidad y austeridad por parte de la entidad, siendo entonces dable concluir que el mentado acuerdo no es lesivo, como se indicó en precedencia, para el patrimonio público.

- e) Finalmente, en lo que respecta a la caducidad de la acción, esta sede judicial considera que el estudio de dicho fenómeno no procede para efectos de la aprobación del acuerdo conciliatorio, como quiera que el asunto materia de acuerdo es la liquidación de unos factores salariales (teniendo en cuenta la Reserva Especial del Ahorro; razón por la cual, al tratarse de reconocimientos periódicos, no pueden ser susceptibles de la ocurrencia de caducidad. Lo anterior, sin perjuicio de establecer que aún no ha culminado el termino de cuatro meses relacionados con la interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, frente a este asunto.

En ese orden y al observar esta instancia judicial que el asunto conciliado cumple con los requisitos de ley y no afecta derechos fundamentales, ni atenta contra el ordenamiento jurídico, no es lesivo para el patrimonio público y respecto del mismo no opera el fenómeno jurídico de la caducidad; este Despacho, teniendo en cuenta el cumplimiento a cabalidad con las formalidades previstas en la Ley 640 de 2001.

RESUELVE:

PRIMERO: PRIMERO: CONOCER únicamente la solicitud de aprobación de la Conciliación Extrajudicial surtida entre señora **GINA ROCÍO ROJAS CASTRO** y la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, conforme lo expuesto.

SEGUNDO: APROBAR la Conciliación Extrajudicial contenida en el Acta con Radicación **E-2022-519756**, celebrada los días 27 de octubre y 17 de noviembre de 2022, ante la **PROCURADURÍA 4 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**; entre la señora **GINA ROCÍO ROJAS CASTRO** y la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES** por el valor de **UN MILLÓN SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS (\$1.609.361)**, por concepto de reliquidación de las prestaciones solicitadas (prima de actividad, bonificación por recreación), con la inclusión de la reserva especial del ahorro, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: Por Secretaría expídase a la convocante, señora **GINA ROCÍO ROJAS CASTRO** copia de la presente providencia, del acta de conciliación y de la liquidación aportada por la entidad convocante, en los términos del artículo 114 del Código General del Proceso y comuníquese a la parte convocada.

CUARTO: Ordenar a la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá, que someta a reparto de manera individual las solicitudes de conciliación extrajudicial de las señoras **MARÍA FERNANDA SOLANO DUMAR** y **LEONOR LEÓN VELASCO**.

QUINTO: Por Secretaría, déjense las constancias respectivas, librense los oficios correspondientes y dese cumplimiento, a la mayor brevedad, a lo aquí resuelto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

MV

Apoderado parte convocante	gustavo21bernal@hotmail.com
Entidad convocada	notificacionesjudiciales@supersociedades.gov.co
Ministerio Público	procjudadm191@procuraduria.gov.co